



SERIE VERBUM

VOLUMEN 3

OBRA DE LA DEMOCRACIA

Cuarenta años de historia mal contados





JUNTA DIRECTIVA

Omar Barboza
PRESIDENTE

Julio César Reyes
PRIMER VICEPRESIDENTE

Alfonso José Marquina Díaz
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

Negal Morales
SECRETARIO

José Luis Cartaya
SUBSECRETARIO

FONDO EDITORIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL

PRESIDENTE
Marianela Rodríguez

GERENTE EDITORIAL
David Rodríguez Argüello

REDACCIÓN Y TRANSCRIPCIÓN
José Armando Benítez Machado

EDICIÓN Y CORRECCIÓN
Jesús Piñero

DISEÑO DE COLECCIÓN
Pablo Rodríguez

DIAGRAMACIÓN
Pablo Rodríguez

FOTOGRAFÍAS
Biblioteca Nacional Archivo Audiovisual
de Venezuela

ISBN: 978-980-7603-55-3
Depósito Legal: DC2018001094

CERAS DE LA DEMOCRACIA

Cuarenta años de historia mal contados

SERIE VERBUM

VOLUMEN 3

JUNIO 2018



Cortesía de la Biblioteca Nacional

NOTA EDITORIAL

En el año 2018 conmemoramos los hechos acaecidos el día 23 de enero de 1958. Sesenta años han transcurrido de la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, momento en el cual se depone un régimen militarista y los intereses ciudadanos se sobreponen al autoritarismo. Es a partir de 1958 cuando comienza en Venezuela un ensayo democrático efectivo que dará estabilidad política y social al país, es durante este período donde la población venezolana crece y se siente efectivamente representada en sus instituciones, el ascenso social y las oportunidades de crecimiento son casi tangibles. Este proyecto de construcción de país fue sostenido durante casi 40 años, todo ello como resultado de las obras de la democracia.

La intención del Fondo Editorial de la Asamblea Nacional es reconocer y enaltecer la obra del período democrático que comenzó en 1958 con la firma del Pacto de Puntofijo, hasta la llegada en 1998 de la revolución bolivariana. Nuestra intención radica en desmontar dos tesis de carácter mítico alojadas en la conciencia y opinión popular. La primera, la noción reivindicativa hacia el perezjimenato y con ella la visión de un hombre fuerte que dirija los destinos del país; y la segunda, es la visión negativa que se le ha construido desde 1998 hasta la actualidad, desacreditando todas aquellos avances políticos y sociales que llegaron a ser referencia para toda Latinoamérica durante las últimas cuatro décadas del siglo xx. Los textos aquí reunidos pretenden traer

a debate la obra democrática de 1958 a 1998, derribando así los mitos y tergiversaciones históricas que se han construido y conformado con la llegada de la revolución bolivariana a Venezuela hace ya veinte años. Los diferentes tópicos copilados van desde obras de infraestructura hasta los aporte de descentralización.

En esta oportunidad, hemos anexado como obertura a estos documentos, un breve ensayo del historiador Mario Buffone, quien además, resulta ser el autor de los textos aquí reunidos, él se ha abocado a lo largo de su carrera académica a reunir datos y estadísticas que sustenten la obra democrática venezolana. Es importante señalar que los datos bibliográficos recabados por el autor serán suprimidos por criterio y estilo editorial, sin embargo, los mismos pueden ser consultados en el blog *Obras de la Democracia Venezolana* en donde se encuentran ampliamente desarrollados. De igual forma, la organización de los artículos extraídos de este blog es distinta para este formato, ya que, fue organizado en tres categorías: Desarrollo y modernización, Servicios y Movilidad Social.

Resulta oportuna la recopilación de estos artículos para deslumbrar todos aquellos aportes sociales que trajo consigo la instauración de un régimen democrático en el país. Obras de la democracia es uno de los pocos intentos académicos para situar y valorar en su justa medida los 40 años de progreso, seguridad y libertades políticas.

LA DEMOCRACIA NO TIENE QUIEN LA ESCRIBA

Mario Buffone

Es difícil luchar contra corriente, sobre todo cuando los mitos se repiten tanto que la colectividad termina por hacerlos verdades inamovibles. Tal es el caso de la visión que muchos tienen sobre el período de la Democracia Civil de 1958 a 1998. Los gobiernos que tuvieron la responsabilidad de conducir el país durante ese momento de la historia han recibido virulentos ataques, falsedades que han contribuido a crear un rechazo injusto en la consciencia colectiva, agresiones que se han incrementado en veinte años de revolución bolivariana, aunque actualmente se empieza a valorar mejor ese momento histórico, prueba de ello es la frase popular: “Éramos felices y no lo sabíamos”. He allí la importancia de este trabajo, valorar objetivamente los aspectos positivos y los negativos de la ejecución de aquellas administraciones y como corolario un balance de ambos aspectos.

Una apretada síntesis de lo que gestionó en esos años incluiría lo siguiente: educación: Creció en 6.184.835 el número de estudiantes, desde preescolar hasta la universidad. Las instituciones universitarias se incrementaron de 6 existentes en 1957, a 136 en 1998. Disminuyó el analfabetismo de un 40% en 1958 a un 7% en 1998 y aumentó la tasa de escolarización de 24% en 1957 a 64% en 1998. Salud: La capacidad de los hospitales públicos subió en 25.417 camas. Se redujo la mortalidad infantil de 62,5 en 1958 a 21,4 en 1998 y la esperanza de vida pasó

de 58 años en 1960 a 72 años en 1998. Embalses: Se comenzaron 78 de los 99 embalses construidos en el país, entre ellos el mayor de todos: el Guri. Agricultura: El área bajo regadío pasó de 13.700 hectáreas en 1958 a 255.433 en 1998. Electricidad: La capacidad instalada de electricidad se elevó de 602 megavatios en 1957 a 21.633 en 1998 y la población con servicio eléctrico pasó del 36% en 1958 al 93% en 1998. Agua: El suministro de agua potable creció de 144 millones de m³ en 1958 a 3.294 en 1998 y la población con este servicio pasó del 31% en 1958 al 84% en 1998. Cloacas: En 1958 sólo el 16% de la población poseía este servicio y en 1998 había aumentado a 66%. Teléfonos: Se creó el Discado Directo Nacional y en 1998 unas 566 poblaciones disfrutaban de ese servicio. Además se pusieron en servicio el Discado Directo Internacional y la comunicación satelital. Parques Nacionales: 41 de los 43 parques nacionales fueron decretados durante el período democrático, entre ellos los dos más grandes del país: Parima-Tapirapecó y Canaima, los cuales son el quinto y sexto en extensión a nivel mundial. Carreteras: Se construyeron 71.168,4 de los 96.189 kilómetros de red vial existente. Autopistas: Se construyeron 1.185 de los 1.617 kilómetros de autopistas gestionadas hasta 2016. Metro de Caracas: La construcción del Metro de Caracas se inició en 1976 y en 2016 poseía 48 estaciones, de las cuales 39 fueron construidas durante los gobiernos democráticos. Cultura: Fueron creadas 574 de las 727 bibliotecas existentes en 2016 y más de 120, de los 171 museos con los que cuenta el país. Viviendas: Entre 1928 y 2014 se culminaron un total de 2.124.459 viviendas por parte del sector público, de las cuales, los gobiernos democráticos hicieron 1.496.306, entre ellas, 436.039 casas rurales que se empezaron a construir desde 1959; nunca antes se habían construido viviendas para la población campesina. Reforma Agraria: Fueron afectadas más de 9.000.000 millones de hectáreas provenientes de grandes

latifundios para dotar de tierras a los campesinos más necesitados. Labor Legislativa: Las ocho legislaturas del Congreso Nacional de esa época aprobaron más de 1.200 nuevas leyes, entre ellas la Constitución de 1961, la de mayor tiempo de vigencia del país. Sin duda alguna, no hay, hasta el momento, mayor y mejor período de desarrollo político, social y económico en Venezuela.

El mito de Pérez Jiménez

Los alcances de la gestión llevada a cabo por el general Marcos Pérez Jiménez que va del 2 de diciembre de 1952 al 23 de enero de 1958, ocupan según sus defensores un sitio de honor en cuanto al desarrollo nacional. Se dice que “nadie ha hecho más que Pérez Jiménez” e incluso que las obras construidas en el sistema democrático ya habían sido planificadas durante ese régimen. Existe la intención de crear nostalgia colectiva por un gobierno que desconoció su propia constitución, al perpetuarse en el poder con el plebiscito de 1957 y negar los mínimos derechos humanos a sus adversarios, para quienes destinó exilios, torturas y asesinatos, justificando tales atrocidades a través de la construcción de una infraestructura que sus partidarios dicen ser la más grande de la historia venezolana. La realidad es muy distinta.

La violación a los derechos humanos no debe ser objeto de apología, además la inmensa mayoría de obras de alcance social que ejecutó la dictadura estaban previstas y muchas de ellas comenzadas durante el Trienio Adeco (1945-1948). Ejemplos de esto lo constituyen el Plan Nacional de Hospitales de 1946, el Plan Nacional de Vialidad de 1947 y el Plan Nacional de Irrigación de 1948, entre otros. Una excepción fue la Ciudad

Universitaria de Caracas, decretada en 1944 por el gobierno de Isaías Medina Angarita, pero igualmente planificada antes de Pérez Jiménez.

Obras puestas en servicio en ese período como los hospitales de Barquisimeto, Periférico de Coche, Porlamar, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Valera, ya estaban en construcción al inicio del régimen en 1952; las autopistas Caracas-La Guaira, del Este, Valle-Coche, Regional del Centro (tramo Valencia-Las Tejerías) y el embalse de Calabozo habían sido diseñados antes de 1952 e incluso la mayoría iniciados también. La Ciudad Universitaria de Caracas fue desarrollada entre 1944 y 1970, eso quiere decir que Pérez Jiménez contribuyó con la construcción de algunos edificios importantes, como el Aula Magna, pero el conjunto fue edificado antes y después su gobierno.

Se deben incluir en las obras culminadas (no planificadas ni empezadas) muchas más, entre ellas el Centro Simón Bolívar de Caracas. La dictadura no proyectó nada dentro una visión de conjunto, aunque sí se dedicó a llevar a cabo obras previstas en los planes antes citados, lo cual sería su punto a favor. En este sentido, es falso que obras clave como el Metro de Caracas hayan sido concebidas en ese tiempo y quizá la confusión se deba a que se hicieron los bocetos de un tren elevado para la capital denominado “Aerobús”, que nunca se construyó. La mayoría de esas obras fueron realizadas en Caracas y las capitales de los estados, herencia ésta que atentó contra los posteriores gobiernos democráticos ya que contribuyó a desequilibrar las condiciones de vida entre las ciudades más pobladas y los pueblos y zonas rurales al crear un patrón de desarrollo que impulsó aun más la emigración hacia las principales aglomeraciones urbanas del país en los años posteriores a 1957.

Este fenómeno que es conveniente recordar había comenzado con la explotación petrolera en el régimen gomecista. Ahora bien, existen obras propias de la dictadura que no forman parte de la planificación

anterior, pero las mismas son principalmente de recreación y embellecimiento, verbigracia, los hoteles Moruco, Bella Vista, Humboldt, Maracay y la Ciudad Vacacional de Los Caracas. Otras obras incluidas en el mismo renglón de recreación y embellecimiento son: el Círculo Militar de Maracay, el Paseo de Los Próceres, el Teleférico del Ávila, el Hipódromo de La Rinconada y el Teleférico de Mérida, estos dos últimos culminados por el gobierno constitucional de Rómulo Betancourt. Vale la pena preguntarse si esas obras de recreación y embellecimiento merecen que se les dé un sitio preponderante en cuanto al desarrollo del país se refiere, tal como lo sostienen los partidarios de la dictadura. Otra creencia extendida es el supuesto nacionalismo del general Pérez Jiménez, algo que queda desmentido con la entrega en concesión de más de 800.000 hectáreas de las mejores tierras a las transnacionales petroleras entre 1956 y 1957. Es importante complementar y analizar con mayor precisión los alcances del perejimenato.



Cortesía de la Biblioteca Nacional

DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN

Red Vial

Una de las labores más importantes de los gobiernos de la contemporaneidad en el mundo, ha sido la construcción de vías que permitan el fácil desplazamiento de los ciudadanos. La rapidez en el transporte dio fluidez a todas las actividades que los seres humanos hacemos; por lo tanto, la deficiencia de este tipo de obras es un obstáculo al desarrollo de los países. En Venezuela el desarrollo de las vías terrestres ha sido un asunto de data reciente, las escasas carreteras que existían a principios del siglo xx servían para transportar vehículos entre muy pocas ciudades y se carecía de conexión entre unas y otras.

El primer gobernante que comenzó con la expansión de la red vial fue Juan Vicente Gómez. Según algunas opiniones, esas carreteras tenían como función facilitar que el ejército accediera con más rapidez a varios sitios claves del país. Algunos han agregado, que estas permitían también llegar a muchas de las propiedades latifundistas que poseía el dictador. Sea cual fuere la razón, el país terminó beneficiándose de las mismas. Entre los beneficios de esta política de construcción está gran parte de la carretera Panamericana, específicamente el tramo de la región andina.

El Programa de Febrero de 1936 y el Plan Trienal de 1938 en la administración de Eleazar López Contreras, al igual que, el Plan de Obras Públicas de 1941, en la gestión de Isaías Medina Angarita, dieron su aporte al desarrollo de este sector de planificación. En cuanto a obras se pueden mencionar: la carretera Trasandina entre Valencia y San Cristóbal y la de los Llanos y Caracas-Ciudad Bolívar. Sin embargo, el mayor impulso de planificación lo representó el Plan Nacional de Vialidad de 1947, elaborado por la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt, donde se continuaron las vías previstas en planes anteriores y se presintieron las primeras autopistas y una serie de carreteras troncales que surcarían todo el país. Ese mismo año comenzaron los trabajos preliminares de la autopista Caracas-La Guaira, con los movimientos de tierra, labores que fueron paralizadas en 1948 luego del derrocamiento de Rómulo Gallegos, siendo reiniciados los trabajos de la misma en 1950.

El fruto inicial de este gran esfuerzo vial, en el primer experimento cívico y democrático que tuvo Venezuela, como lo fue la Revolución de Octubre, lo cobró la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, cuando inauguró la referida autopista 1953, siendo, por cierto, quien menos contribuyó a su construcción. También, el dictador comenzó a construir la autopista Regional del Centro, en su tramo Las Tejerías-Valencia. En total, para finales de 1957 existían en nuestro país 24.502 kilómetros de red vial.

La llegada de la democracia en 1958 potenció como nunca antes la ejecución de nuevas vías y la reconstrucción y modernización de las existentes. Algunas de las más importantes obras ejecutadas entre 1958 y 1998 fueron las autopistas Regional del Centro tramo Coche-Las Tejerías, Valencia-Puerto Cabello, Charallave-La Verota, Barcelona-El Tigre (hasta Bajo Hondo), Valencia-Campo de Carabobo, Centro-

Occidental (antes conocida como Rafael Caldera y actualmente como Cimarrón Andresote), Coro-Punto Fijo, Barquisimeto-Carora, Petare-Guarenas, Ciudad Bolívar-Ciudad Guayana, El Rodeo-Quíbor, Ciudad Guayana-Upata, Variante Guacara-Bárbula, Valera-Trujillo (Eje Vial) y Mérida-Panamericana. Además, en los años 90 estaban en construcción las autopistas: José Antonio Páez (Los Llanos), Antonio José de Sucre (Barcelona-Cumaná), San Cristóbal-La Fría, Rómulo Betancourt (Oriente), Circunvalación Norte de Barquisimeto y Acarigua-Barquisimeto; las carreteras: Tocuyito-Chivacoa, Valle de La Pascua-Anaco, Guanare-Boconó, Barinas-Mérida, Cumaná-Güiria, Lara-Zulia, Guatire-Barcelona, San Fernando-Achaguas, San Juan de los Morros-Altagracia de Orituco-Santa Teresa del Tuy, Machiques-La Fría, Dos Caminos-Puerto Miranda, Barinas-San Cristóbal, El Dorado-Santa Elena del Uairén, Caicara del Orinoco-Puerto Ayacucho.

Los distribuidores El Pulpo, La Araña y El Ciempiés (Caracas), San Blas (Valencia), Obelisco (Barquisimeto) y Las Delicias (Maracaibo); los puentes María Nieves (Apure), Simón Bolívar (Táchira-Cúcuta), Rafael Urdaneta (Zulia, el más largo del país), los 3 puentes que cruzan el Caroní (Bolívar), José Antonio Páez y José Cornelio Muñoz (Apure), Río Limón (Zulia), Turumo (Miranda), Caura (Bolívar); y los túneles La Cabrera, Los Ocumitos, La Planicie, El Paraíso, El Valle, La Trinidad, Turumo, Vuelta Grande, Santa Teresa (el más largo del país), Caña Brava y Estanquez.

En resumen, se construyeron 71.168,4 de los 96.189 km de red vial del país. En el período de gobierno que abarca desde 1999 hasta 2014 se han gestionado sólo unos pocos tramos de autopistas y carreteras, en total, 518,6 km. Sin duda alguna, nadie ha hecho más que la democracia en cuanto al desarrollo vial del país.

Autopistas

La red vial de nuestro país fue construida principalmente durante el sistema democrático (1958-1998). Es importante resaltar este punto, pues existen muchos mitos creados en torno al tema de las obras viales que gestionaron los caudillos militares. En el caso de la construcción de autopistas, las falsas creencias están a la orden del día, veamos algunos ejemplos. Muchos atribuyen al dictador Marcos Pérez Jiménez la construcción de la autopista Caracas-La Guaira, pero lo cierto es que, esa vía fue una de las proyectadas dentro el Plan Nacional de Vialidad de 1947, elaborado por la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt.

La obra no pudo comenzar según lo previsto debido a que en 1948 se produjo el derrocamiento del presidente constitucional Rómulo Gallegos. Esta se inició en enero de 1950, cuando gobernaba Carlos Delgado Chalbaud, seguida por Suárez Flamerich y Pérez Jiménez la continuó al llegar al poder el 2 de diciembre de 1952, la cual inauguró un año más tarde, vale preguntarse: ¿cuánto de la misma es atribuible al dictador? La respuesta parece ser sencilla, pues sólo la pavimentación y algunos otros detalles.

Otra autopista construida por el tirano fue el tramo Valencia-Las Tejerías, de la autopista Regional del Centro. En total, durante el período 1950-1957, se ejecutaron 115 km durante 8 años, equivalentes a un promedio 12,8 km por año. Esto incluye lo gestionado durante el régimen militar. La democracia venezolana fue mucho más allá en cantidad de kilómetros construidos y también en área geográfica, pues hizo autopistas en todo el país y no sólo en la región centro-norte.

El total de vías construidas llegó a 343 km hasta 2017, lo que da un promedio anual de 18,1 km. Sin duda alguna la democracia venezolana

lleva la vanguardia en la construcción de este tipo de vías rápidas; comparemos los 3 promedios anuales totales para comprobarlo: 1950-1957: 12,8 km; «Socialismo del siglo XXI»: 1999-2017: 18,1 km y la democracia: 29,0 km. Contrastemos también algunos ejemplos individuales: la autopista Barcelona-El Tigre se comenzó en 1968 y hasta 1998 se construyeron 118 km (3,3 anuales), desde 1999 sólo se han construido 3 km (0,2 anuales); la autopista Centro Occidental se inició en 1972 y hasta 1998 la democracia construyó 116 km (4,3 anuales), el actual régimen la culminó con un tramo de 28 km en 17 años (1,6 km anuales); la autopista San Cristóbal-La Fría se empezó en 1973 y hasta 1998 se había hecho 38 km (1,5 anuales) y la actual gestión sólo ha logrado hacer 4 km (0,2 anuales); la autopista José Antonio Páez tuvo su comienzo en 1979 y hasta 1998 se pusieron en servicio 155 km (7,8 anuales) y el gobierno actual dos tramos que suman 83 km (4,6 anuales); por último, está la autopista de Oriente, cuyo comienzo fue en 1973 y hasta 1998 se tramitó la construcción de 129 km (5,0 anuales) y los actuales usufructuarios del poder, hasta 2017, 89 km (4,7 anuales).

La mayor eficiencia democrática en la construcción de autopistas se reafirma con la enorme diferencia de ingreso fiscal que ha habido desde 1999 respecto a los presupuestos de períodos anteriores. Todas estas cifras deberían ser divulgadas, no sólo para derribar mitos, sino también para hacer justicia con la gran labor de la democracia civil venezolana.

Metro de Caracas

La capital de la república posee un alto volumen de tráfico vehicular, aquella Caracas bucólica de techos rojos, como se decía antaño, dejó de existir hace mucho tiempo. La muerte del dictador Juan Vicente Gómez en 1935 generó muchos cambios, entre ellos la política de desarrollo. Desde ese momento los gobiernos desarrollaron una gestión más social orientada a combatir los graves problemas que aquejaban en esos tiempos. Sin embargo, es importante hacer una diferenciación entre las distintas propuestas de desarrollo, antes de 1958 las soluciones aplicadas fueron principalmente en Caracas y en algunas capitales de estados, casi nada en los pueblos y zonas rurales, como el resultado se produjo una fuerte emigración hacia la zona metropolitana.

El número de automóviles creció en forma exponencial y comenzó a crear soluciones viales (calles, avenidas y autopistas) para facilitar a dar movilidad a esa enorme masa de personas que se asentaban en la capital. La primera propuesta de crear un ferrocarril metropolitano o “metro” —como es conocido popularmente— se hizo en el trienio adeco, específicamente en 1947, pero no se materializó debido a la escasa producción de electricidad para ese entonces. Derrocado Gallegos por el militarismo presidido por Marcos Pérez Jiménez, muchos partidarios de aquel despota expresan que el actual sistema Metro de Caracas se planificó en aquel régimen, algo completamente falso.

Quizá la confusión en este caso estriba en que la dictadura elaboró un proyecto denominado “Aerobús” que constaba de un metro elevado, lo que se conoce en otras partes del mundo como monorriel o monorail, es decir, un tren metropolitano cuyas vías están varios metros por encima de la superficie. De aquel “Aerobús” se hicieron los bocetos de una línea propuesta entre El Silencio y Bello Monte. Este hecho ha ali-

mentado el mito del supuesto desarrollismo de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Lo cierto es que, al caer el gobierno militar no había ni metro ni proyecto del mismo. La llegada de la democracia permitió un estudio más serio del problema del tráfico caraqueño, las soluciones viales gestionadas a partir de 1958 ayudaron, pero no lograron resolver el grave problema automovilístico de la ciudad.

En 1966 el gobierno del presidente Raúl Leoni nombra al ingeniero José González Lander director de la Oficina Ministerial de Transporte, creada en 1964. Este ciudadano es el principal responsable del actual sistema y se mantuvo como gerente principal del metro hasta 1997. La planificación inicial del subterráneo se hizo a partir de 1968, a finales de la gestión de Leoni y se continuó con la primera administración del presidente Rafael Caldera. Este mandatario comenzó los trabajos en la estación Agua Salud en diciembre de 1973, pero la llegada del nuevo gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1974, tuvo como consecuencia la suspensión temporal de los trabajos por considerar que se debía equipar primero el interior del país para no continuar ahondando la brecha de desarrollo entre la capital y el resto país, una política inteligente y responsable. Avanzado ese propósito, la misma gestión de Carlos Andrés Pérez inicia en 1976 los trabajos de la Línea 1 (Propatria-Palo Verde) y el 8 de agosto de 1977 creó la C. A. Metro de Caracas, con el fin de gerenciar el sistema. Lo demás es historia reciente.

En 1979 la administración del presidente Luis Herrera Campíns comienza los trabajos en la Línea 2 (Zoológico-Las Adjuntas-El Silencio) y continúa la Línea 1, la cual pone en servicio el 2 de enero de 1983 en su tramo Propatria-La Hoyada y el 27 de marzo de ese mismo año se extiende el servicio hasta Chacaíto. El presidente Jaime Lusinchi fue quien más expandió el proyecto pues el 4 de octubre de 1987 inaugura la Línea 2 en su tramo La Paz-Zoológico-Las Adjuntas. Ese mismo

día se inició el servicio Metrobús como alimentador del sistema. El 23 de abril de 1988 se entendió la Línea 1, hasta Los Dos Caminos y el 6 de noviembre de ese mismo año se concluyó la Línea 2, hasta El Silencio. Al presidente Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno correspondió concluir, el 19 de noviembre de 1989, la Línea 1 hasta Palo Verde, la misma que él había iniciado y en 1990 comienza los trabajos de la Línea 3 (Plaza Venezuela-La Rinconada) cuyo tramo hasta El Valle, puso en servicio el presidente Rafael Caldera el 18 de diciembre de 1994. En total, 39 estaciones de las 47 que actualmente tiene el sistema.

El régimen actual apenas ha inaugurado 8 estaciones en 15 años: culminó la Línea 3 hasta La Rinconada y la Línea 4 en el tramo Capuchinos-Zona Rental, dicho sea de paso, con la planificación que dejó la democracia y con la terrible pérdida del buen servicio que tuvo en sus primeros años. Actualmente no es como decía su viejo lema: “La gran solución para Caracas”. Tal parece que la *cultura metro* quedó atrás.

Viviendas

La política de construcción de viviendas se inicia en Venezuela formalmente el 30 de junio de 1928, en la dictadura de Gómez, con la creación del Banco Obrero, primer organismo encargado de la labor de planificar y construir viviendas por parte del sector público. Entre ese año y 1945 (Gómez, López Contreras y Medina Angarita) fueron construidas 1.931 viviendas (107 anuales), incluidas las de la urbanización El Silencio, en Caracas. El 18 de octubre de 1945 accede al poder la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt y en los 3 años de duración de la Revolución de Octubre (1945-1948), que incluye a la efímera gestión de Rómulo Gallegos, primera

experiencia civil, en este caso cívico-militar y democrática, se construyeron 4.826 viviendas (1.609 anuales), previstas en el Plan de Vivienda del Banco Obrero.

Esto da un ejemplo del bienestar que generan los gobiernos civiles y democráticos en contraposición a los militaristas, no importa su signo. Otro dato importante de ese trienio es que por primera vez se construyeron más viviendas en el interior del país que en el Distrito Federal (actuales Distrito Capital y Estado Vargas). De esa época podemos mencionar como ejemplos las urbanizaciones Los Jardines de El Valle y Casalta, en Caracas; el Hipódromo, en Maracay y Los Morichales, en Ciudad Bolívar. Luego del trienio advienen dos juntas militares entre 1948 y 1952, presididas por Delgado Chalbaud y Suárez Flamerich, en cuyos 4 años el Banco Obrero gestiona 7.285 viviendas (1.821 anuales).

Posteriormente, la dictadura de Pérez Jiménez desarrolla la política de “Concreto Armado” y se lograron edificar 24.970 viviendas entre 1953 y 1957 (4.994 anuales). Ciertamente una cifra espectacular, pero con una característica muy negativa: 20.269 de esas viviendas fueron levantadas en el Distrito Federal (81%), es decir, la mayor parte en Caracas y sus alrededores y por eso es que en las argumentaciones de los perezjimenistas siempre se hace mención de las urbanizaciones Lomas de Propatria, Diego de Losada, Lomas de Urdaneta, Simón Rodríguez y la sempiterna 2 de Diciembre (actual 23 de Enero), entre otras, todas en la capital de la república y nunca se menciona el interior del país. A partir de 1958 cambia la historia pues la llegada de la democracia pone en marcha otros enfoques en materia de vivienda y de urbanismo. Una de las novedades fue el decreto del 14 de marzo de 1958 que crea el Programa Nacional de Vivienda Rural, las famosas “casitas de malariología”, con lo que, por primera vez se empiezan a erigir casas para los campesinos y que colaboró junto con el Banco Obrero y otros organismos públicos en la

política de viviendas de interés social, generalmente para los sectores más desposeídos.

La labor de la democracia en materia de construcción de viviendas se puede desglosar así: 1958: 879 viviendas; Rómulo Betancourt (1959-1964), 33.892 (6.778 anuales). Este mismo gobernante decretó en 1961 la creación del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo (SNAP), cuya función primordial era el financiamiento para la construcción y adquisición de viviendas destinadas a los sectores de ingreso medio de la población, otro ejemplo de la movilidad social propia de la democracia; Raúl Leoni (1964-1969), 123.299 viviendas (24.660 anuales), Rafael Caldera I (1969-1974), 177.329 viviendas (35.466 anuales); Carlos Andrés Pérez I (1974-1979), 146.398 (29.280 anuales).

Es este quinquenio cuando el Banco Obrero se transforma en Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi), organismo creado el 23 de mayo de 1975 y el Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (Fondur), decretado el 1º de septiembre del mismo año, cuya competencia principal fue la adquisición de tierras para la expansión urbana; Luis Herrera (1979-1984), 194.431 viviendas (38.886 anuales), también en este quinquenio se promulgó la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio, que preveía, entre otras cosas, la localización de los asentamientos humanos; Jaime Lusinchi (1984-1989), 314.251 viviendas (62.850 anuales); igualmente, se aprobó el 16 de diciembre de 1987 la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, cuyas funciones principales eran la planificación, desarrollo, conservación y renovación de los centros poblados; Carlos Andrés Pérez II (1989-1993), 253.490 viviendas (50.698 anuales); también, el 14 de septiembre de 1989, se crearon el Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi) asesorar y contribuir técnicamente en la definición de la política habitacional y la Ley de

Política Habitacional; Rafael Caldera II (1994-1999) 252.337 viviendas (50.467 anuales).

En total, la democracia construyó 1.496.396 viviendas y se hicieron urbanizaciones como Caricuao (Caracas), La Trinidad (Maracaibo), La Isabelica (Valencia), Bararida (Barquisimeto), Caña de Azúcar (Maracay), entre otras. Sin duda alguna, nadie supera a la democracia venezolana en materia de construcción de viviendas de interés social.



Cortesía de la Biblioteca Nacional

SERVICIOS

Electricidad, Aguas Y Cloacas

El siglo XIX fue decisivo en el comienzo del uso a gran escala de la electricidad en todo el mundo. Igualmente lo fue en Venezuela, el 24 de octubre de 1888 las principales calles de Maracaibo fueron testigos del inicio del alumbrado eléctrico en nuestro país. El 8 de agosto de 1897 le correspondió el mismo honor a Caracas, capital de la república, pero era largo aún el camino para expandir masivamente el suministro de electricidad.

Las dificultades provenían principalmente en generar grandes cantidades de energía y transportarla a través de un país relativamente grande y con un relieve muy dispar. En principio se echó mano de la gran disposición de hidrocarburos y la generación se basó casi exclusivamente en la electricidad producida por plantas que funcionaban con combustible. Las consecuencias negativas de este tipo de generación eran la contaminación y el empleo de combustible que podría ser usado en otros menesteres, con el agravante de ser un recurso natural no renovable.

Los dictadores militares no elaboraron grandes planes de desarrollo eléctrico hasta la llegada del trienio adeco en 1947, siendo Rómulo Betancourt presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, se

concibió el Plan Nacional de Electrificación. Este plan proyectó un gigantesco aumento de la producción de energía eléctrica a través de imponentes embalses que generarían electricidad a través del agua. Las ventajas de ese método son su apego a la ecología por no ser contaminante, su mantenimiento en el tiempo al ser el agua un recurso natural renovable y la liberación de cantidades de combustibles para otros usos. Quizá su único inconveniente sería las grandes inversiones necesarias para encausar los ríos y emplear su fuerza con el fin de producir electricidad. Con el derrocamiento de Rómulo Gallegos, la dictadura militar continuó esa planificación y en 1953 el dictador Marcos Pérez Jiménez nombró a Rafael Alfonzo Ravard como presidente de la Comisión de Estudios para la Electrificación del Caroní, conformada además por un grupo de valiosos venezolanos, quienes trabajaron sobre la base del plan de 1947.

Se diseñaron grandes embalses y el primero de ellos en construirse fue Macagua en 1956. La democracia llegaría en 1958 y le tocó ponerlo en servicio en 1959. En 1963 se empezó la construcción del gigante: el Guri, culminado en 1986; posteriormente vendrían Santo Domingo, Uribante-Caparo y Bocono-Tucupido e incluso Planta Centro, de generación termoeléctrica, la mayor de América Latina, cuyo fin es cubrir la producción de energía en los años de escasas lluvias. La construcción de embalses era necesaria y la democracia puso en servicio 75 de estas estructuras de las 99 gestionadas en el país. Con estos embalses se empezó a producir también una mayor cantidad de agua para el suministro a seres humanos, comercios e industrias.

Esta agua ya usada debía tener una recolección, pero eran escasas las cloacas y debió emprenderse una construcción acelerada de las mismas a partir de 1958, pues la disposición se hacía mayoritariamente en excusados y pozos sépticos, desarrollados en gran escala a partir del tri-

nio adeco, ya que antes de ese período la población recurría a la intemperie con el consiguiente desarrollo de enfermedades. Los tres servicios públicos tuvieron una implantación conjunta por las gestiones democráticas, desarrollo que fue progresivo hasta 1998. Es necesario acotar las terribles condiciones de vida que imperaron hasta 1957, sobre todo en el interior del país, pues se insiste mucho en un supuesto avance creado por la dictadura de Pérez Jiménez. Las siguientes cifras desmienten ese mito: la población con servicio de electricidad era apenas del 36% en 1958 y la democracia lo elevó a 93% en 1998. Quienes contaban con suministro de agua potable en 1958 apenas eran un 31% y en 1998 habían ascendido a 84%.

Finalmente, los ciudadanos que disponían de servicio de cloacas en 1958 eran un mísero 16% y para 1998 era de un 66%. Estos impresionantes números son más meritorios si tomamos en cuenta que entre 1958 y 1998 la población venezolana aumentó a una tasa anual promedio de 3,1%, la más alta de América Latina y una de las mayores del mundo. Nuestra real historia contemporánea está llena de cuantiosos hechos que los enemigos de la democracia quieren ocultar.

Desarrollo Eléctrico

El 29 de mayo de 1946, la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt, creó la Corporación Venezolana de Fomento (CVF), cuya función principal la expansión del sector eléctrico. En 1947 ese organismo creó el Plan de Electrificación Nacional, el primero del país, y sobre esa base se fue creada en 1953 la Comisión de Estudios para la Electrificación del Caroní, presidida por Rafael Alfonzo Ravard.

En 1956 se comienza la construcción del embalse Macagua, primero de los propuestos por la referida comisión, el cual empezó su servicio en 1959 y con él se iniciaba la producción de hidroelectricidad en gran escala, ideal por ser una fuente renovable y no contaminante. El 27 de octubre de 1958 se crea la C. A. de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe), que reunió a quince empresas eléctricas creadas por la CVF, señal de que el Estado venezolano tenía la firme convicción de desarrollar la electricidad nacional. Hasta ese año, cuando se inició la democracia venezolana, la producción de energía era dominada por el sector privado y estaba constituido por una serie de plantas que producían energía independientemente unas de otras y el 94% funcionaba con combustible (termoelectricidad).

A partir de 1960 comienza el proceso de interconexión del Sistema Eléctrico Nacional para prevenir cortes por fallas o mantenimiento de la infraestructura. El 8 de agosto de 1963, a finales del mandato constitucional del presidente Rómulo Betancourt, se firmó el contrato para la ejecución del Embalse Guri, que produce la mayor parte de la electricidad del país. Esta represa comenzó sus servicios en forma parcial el 8 de noviembre de 1968, en el mandato del presidente Raúl Leoni y fue culminada totalmente el 8 de noviembre de 1986, siendo jefe de estado Jaime Lusinchi. Antes de poner el servicio el Guri se debió cumplir el cometido de unificar la frecuencia eléctrica, ya que en gran parte de Venezuela los aparatos trabajaban con cincuenta ciclos y el Guri funcionaría con sesenta ciclos. Su función era modificar esta frecuencia sin costo alguno para los usuarios. Ese proceso se llevó a cabo entre 1968 y 1971.

En septiembre de 1978, bajo la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, se inauguró Planta Centro, que es una infraestructura termoeléctrica diseñada para apoyar al sistema eléctrico nacional en caso

de poca cantidad de lluvias, pues ya que en esa época se había logrado que la mayor parte de la generación fuera hidroeléctrica. El 19 de diciembre de 1982 se produjo la Tragedia de Tocoa, que constituyó una prueba de fuego para el sistema eléctrico nacional; dicha planta sufrió una explosión y quedó imposibilitada para enviar energía a la capital y, sin embargo, a pesar de los numerosos fallecidos y las pérdidas materiales, existió un punto positivo: Caracas no se quedó sin luz pues la mayor parte de la red de electricidad estaba interconectada y otras plantas pudieron proveer a la ciudad de energía eléctrica. En 1998 el 73% de la electricidad generada tenía origen hidroeléctrico.

A partir de 1999 el gobierno nacional no ha logrado tener la misma calidad en la expansión de la capacidad instalada de electricidad y tampoco ha cumplido con el mantenimiento de la infraestructura, dando como resultado las fallas que a diario sufrimos los usuarios de este servicio.

Embalses

Este tipo de infraestructuras son de data relativamente nueva en Venezuela. El primer embalse construido con características modernas en el país fue el dique de Caujarao, gestionado en el período de Juan Crisóstomo Falcón. El siguiente, y primero con función de producir electricidad, fue El Encantado, en la administración de Joaquín Crespo. La larga dictadura de Juan Vicente Gómez solo ejecutó el de Petaquire. El gobierno de López Contreras no inició nuevos embalses. Seguidamente, la gestión de Medina Angarita comenzó los embalses de Zuata, Macarao I y El Corozo. Al trienio adeco correspondió la

construcción de 6 embalses: Agua Fría, Guataparo, La Asunción, La Mariposa, San Juan y Taiguaiguay.

La impronta del primer gobierno verdaderamente democrático y civil se dejó sentir no sólo por la gran cantidad de embalses iniciados, sino por la elaboración del Plan Nacional de Irrigación de 1948, cuyo objetivo principal era estimular la agricultura a través del riego y así lograr el autoabastecimiento alimentario. La Junta Militar presidida por Delgado Chalbaud comenzó únicamente el embalse de Jabillal. Posteriormente, la Junta de Gobierno presidida por Suárez Flamerich comenzó los embalses Copapuycito y Guatamare. La dictadura de Pérez Jiménez a la que se le atribuye la construcción de una inmensa cantidad de obras de infraestructura, sólo inició 4 embalses: Guárico, el mayor para regadío agrícola y previsto en el Plan Nacional de Irrigación; Morón, Coco 'e Mono y Macagua, primer embalse para la generación hidroeléctrica y previsto en el Plan Nacional de Electrificación del trienio adeco en 1947.

El balance hasta 1957 indica que se iniciaron 19 embalses, de los cuales se terminaron 16 y se dejaron 3 en construcción (Guatamare, Macagua y Coco 'e Mono). A partir de la llegada de la democracia civil, se dio el período de mayor construcción de este tipo de infraestructuras hidráulicas jamás visto en nuestro país. La Junta de Gobierno de 1958, inició el embalse de Pueblo Viejo (o Burro Negro) y terminó Guatamare y Coco 'e Mono.

La administración de Rómulo Betancourt terminó el embalse de Macagua e inició once: Guanapito, Lagartijo, Las Majaguas, Quebrada Seca, El Isiro, Santa Clara, Mapara, Camatagua, Clavellinos, El Pilar y el más grande de todos los existentes en el país: el embalse del Guri, cuya construcción se inició en 1963 y se terminó en 1986, siendo obra de los

gobiernos democráticos dentro de ese período. De él proviene más de la mitad de la generación de electricidad de Venezuela.

La presidencia de Raúl Leoni comenzó trece: La Estancia, Tamanaco, Tocuyo de la Costa, Tulé, La Perezza, Cumaripa, Ocumarito, San Pedro, Agua Viva, Dos Cerritos, Durute, La Becerra y Puente Blanco. Al primer gobierno de Caldera correspondió emprender nueve: El Zamuro, Guaremal, Santo Domingo, Cabuy, Pao-Cachinche, El Tablazo, Onia, Socuy y San Francisco de Macanao. Es importante señalar que la primera gestión de Carlos Andrés Pérez arrancó la construcción de treinta y cuatro: Atarigua, El Cigarrón, Yacambú-Quíbor, Boconó, Canoabo, El Guapo, El Palmar, Guacamayal, La Tigra, La Vitera, Las Barrancas, Macarao II, Santa Rosa, Tierra Blanca, Tucupido, Cruz Verde, El Andino, El Guaical, El Guamo, El Médano, El Pueblito, La Tigrita, Los Quediches, Matícora, Pao-La Balsa, Tiznados, Vista Alegre, Mamito, Masparro, Turimiquire, Uribante, El Cují, Pedregal y Taparito.

El gobierno de Herrera Campíns inició tres: El Cristo, Camburito-Caparo y Taguacita. Durante el período constitucional de Lusinchi se comenzaron cuatro: Machango, El Ermitaño, Taguaza y Hueque. En el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez se iniciaron El Diluvio y Vilchez, sumados a los treinta y cuatro comenzados en su primer gobierno, le da el récord de treinta y seis embalses, aún no superado por ningún otro gobernante. Y, finalmente, el segundo gobierno de Rafael Caldera correspondió emprender el embalse de Caruachi. Estos dos últimos períodos constitucionales se vieron afectados por la situación económica de la nación.

El balance total de los 40 años de la democracia venezolana es de setenta y ocho embalses iniciados de un total de noventa y nueve construidos y dejó tres en ejecución: El Diluvio, Caruachi y Yacambú.

Resulta imposible negar que sobre esta inmensa infraestructura se asienta la mayor parte de la generación eléctrica y de suministro de agua, tanto para consumo humano como para regadío agrícola. El régimen imperante desde 1999, a pesar de poseer los mayores recursos fiscales de la historia, tiene en su haber apenas la terminación de El Diluvio y Caruachi y el comienzo de dos: Tocomá y Cuira, planificados por la democracia civil.

Parques Nacionales

Una política gubernamental seria y responsable debe incluir la protección de áreas ecológicas, paisajísticas y de vida animal o vegetal, las cuales generen la necesidad de ser conservadas para permitir actividades recreativas, turísticas y de investigación. La previsión de las exigencias futuras es una de las más loables condiciones humanas, al llegar a las generaciones posteriores los recursos disponibles en el presente. Es por ello que el Estado venezolano decidió crear parques nacionales, los cuales forman parte de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), sin embargo, estas acciones eran muy tímidas en su comienzo.

El primero de los parques nacionales decretados fue el de Rancho Grande (1937), siendo Eleazar López Contreras presidente de la república. A este parque se le modificó el nombre en 1953 para colocarle su denominación actual de Henri Pittier. El segundo parque nacional creado fue el Sierra Nevada en 1952, por parte de la Junta de Gobierno presidida por Germán Suárez Flamerich. En esta área se encuentra el Pico Bolívar, el lugar más alto del país, con 4.978 metros sobre el nivel del mar. La dictadura de Marcos Pérez Jiménez no contempló la

creación de nuevos parques nacionales, otro ejemplo que demuestra el gran mito inventado por interesados para desvirtuar la inmensa obra democrática y civil.

En 1958 es derrocado el dictador, comienza una política más decidida en la fundación de este tipo de áreas protegidas. Ese mismo año se decretan dos nuevos parques nacionales: Guatopo y El Ávila. El gobierno constitucional de Rómulo Betancourt fundó los parques nacionales de Yurubí en 1960, Yacambú y Canaima en 1962. El caso de Canaima es importantísimo porque alberga el Salto Ángel que, con sus 979 metros sobre el nivel del mar, es el salto de agua más alto del mundo. Es el segundo parque más grande del país y sexto del planeta.

La primera gestión de Rafael Caldera crea los parques nacionales Cueva de la Quebrada del Toro en 1969, Archipiélago de Los Roques en 1972, Macarao y Mochima en 1973, Laguna de La Restinga, Médanos de Coro, Laguna de Tacarigua, Cerro El Copey-Jóvito Villalba y Aguaro-Guariquito en 1974. La primera presidencia de Carlos Andrés Pérez se destaca por decretar diez parques nacionales: Morrocoy en 1974, El Guácharo en 1975, Terepaima en 1976, Jaua-Sarisariñama, La Neblina, Cerro Yapacana, Duida-Marahuaca, Península de Paria, Sierra de Perijá y El Tamá en 1978. La administración del presidente Jaime Lusinchi funda los parques nacionales de San Esteban y Juan Crisóstomo Falcón-San Luis en 1987, Santos Luzardo Cinaruco-Capanaparo, General Cruz Carrillo-Guaramacal y Dinira en 1988 y Páramos Batallón y La Negra en 1989. La segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez se distingue por la creación de once parques nacionales: Chorro El Indio, Sierra La Culata y Cerro Saroche en 1989; Turuépano, Mariusa-Delta del Orinoco, Ciénagas de Juan Manuel y Parima-Tapirapecó en 1991.

Hay que hacer mención de los últimos dos parques: Ciénagas de Juan Manuel donde se produce un fenómeno conocido como Relámpago del Catatumbo el cual se considera el mayor generador de ozono del mundo. El otro es Parima-Tapirapecó importante porque con sus 3.900.000 hectáreas es el parque nacional más grande Venezuela y quinto del mundo por su tamaño. En la misma administración de Carlos Andrés Pérez II fueron decretados Río Viejo y Tirgua en 1992 y, finalmente, El Guache y Tapo-Caparo en 1993. Carlos Andrés Pérez creó en sus dos gestiones veintiún parques nacionales, casi la mitad de los existentes en el país, lo cual lo convierte en el presidente más distinguido en la política ambientalista, no sólo por los parques, sino por otras áreas bajo régimen de administración especial y la legislación de protección al ambiente sancionada en sus dos períodos como jefe de Estado.

La democracia venezolana fue el período de mayor creación y expansión de parques nacionales, pues de cuarenta y tres existentes en la actualidad es responsable de decretar cuarenta y uno, es decir el 95%. Lamentablemente, después de 1993 no han sido creadas más áreas con estas características y quienes actualmente detentan el poder no han hecho el más mínimo esfuerzo de acrecentar el acervo de ecosistemas protegidos. Es indispensable reconocer y difundir la importancia de la labor democrática en éste y otros casos.

Salud

La salud en Venezuela es un aspecto donde los ciudadanos sienten que sus necesidades no son satisfechas, especialmente con la medicina dependiente del sector público. Ello genera una sobrecarga de uso del sistema de salud privado que no está en condiciones materiales de absorber la demanda de la población venezolana. A pesar de lo que pudiera pensarse, en nuestro país sí ha habido planes para mejorar la salud, pero sólo a partir de la historia contemporánea de la nación.

Ya en el Programa de Febrero de López Contreras en 1936, proyectó la construcción de varios hospitales en Caracas y las capitales de estado. En ese momento comenzó la tan necesaria modernización y ampliación del sistema de salud del país, pero aún faltaban muchos detalles para hacerlo realmente eficaz. Una gran contribución lo constituyó el Plan Nacional de Hospitales, elaborado en 1946 por la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt, instrumento con el cual se previeron la mayoría de los más grandes hospitales de la nación. Con este plan se comenzaron los centros de salud que fueron inaugurados durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y que el colectivo atribuye completamente a esa gestión. A Pérez Jiménez le correspondió “cortar la cinta” de varias de esas edificaciones que ya estaban en construcción para el año 1952 cuando ascendió al poder.

Al llegar el sistema democrático en 1958 había muchos aspectos por resolver en cuanto al sistema sanitario. Ejemplos de esto eran: el escaso número de médicos, producto de que hasta 1957, último año de Pérez Jiménez, sólo existían seis universidades en el país; la elevada tasa de mortalidad infantil; una gran cantidad de casos de enfermedades infecciosas que podrían ser fácilmente prevenidas o tratadas; viviendas rurales no aptas; escasez de sistemas de disposición de aguas servidas, entre

otros. Había otro factor importante que tenía que ver en forma indirecta con el sistema sanitario: pocas carreteras, lo que incidía en el traslado de los pacientes. Todas estas variables se conjugaban y dificultaban las posibilidades de una vida sana en la Venezuela de la época.

El período democrático actuó en varios frentes simultáneamente para atacar los problemas. En principio, concluyó los hospitales en construcción pertenecientes al Plan Nacional de Hospitales de 1946. Posteriormente, se dio inicio a la construcción de los llamados “hospitales tipo”, centros de salud con igual diseño arquitectónico, los cuales se repitieron en numerosas ciudades y pueblos. En este sentido se pusieron en servicio dispensarios con capacidad superior a 100 camas en las principales ciudades del país y varias decenas de éstos más pequeños hasta completar un poco más de 200 nuevos dispensarios, por lo que se puede concluir que un poco más de las dos terceras partes de la infraestructura pública existente en materia de salud se construyó durante la democracia.

Las camas hospitalarias públicas aumentaron de 18.633 en 1957 a 44.050 en 1998. La creación de numerosas universidades permitió la disminución de 1.718 a 490 habitantes por cada médico entre 1957 y 1998. La mortalidad infantil bajó de 67,2% a 21,4% entre 1957 y 1998. La ampliación de las jornadas de vacunación y de otras técnicas disminuyó la incidencia de enfermedades. A partir de 1959 se comenzó el Programa Nacional de Vivienda Rural, que hizo posible por primera vez en la historia del país la construcción de casas adecuadas para los campesinos y de las cuales se concluyeron 436.039 unidades. La población con servicio de cloacas se elevó de 16% en 1958 a 67% en 1998. La esperanza de vida por cada venezolano aumentó de 57,2 años en 1958 a 72,16 en 1998.

Por último, la red de carreteras casi se cuadruplicó al pasar de 24.502 km en 1957 a 95.670,4 km en 1998. A pesar de ello, no fue posible resolver del todo los problemas, pues la población venezolana creció a una tasa anual promedio de 3,1%, la más alta de América Latina. Sin duda alguna, hasta los actuales momentos no ha sido sobrepasada la labor de la democracia venezolana en el sector salud.



*Cortesía de
la Biblioteca Nacional*

MOVILIDAD SOCIAL

Crecimiento Socioeconómico

A mediados del siglo xx, Venezuela tenía una sociedad con características de muy poca movilidad social, en la cual había una gran masa de campesinos explotados por un puñado de personas pudientes que a su vez controlaban a los gobiernos de turno. El derecho al voto estaba restringido: sólo podían ejercerlo varones que supieran leer y escribir eran estos electores los que mantenían en el poder a los caudillos que gobernaban desde 1830 y propiciaban esa situación de atraso. Este era un círculo vicioso difícil de vencer.

El 18 de octubre de 1945 sucedió una ruptura histórica. El general Isaías Medina Angarita fue derrocado y asumió el poder la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt. La gestión revolucionaria acometió una serie de acciones para sacar al país del gran atraso en el que lo habían sumido los gobiernos militares. Una medida importante fue la creación de la Corporación Venezolana de Fomento (CVF), el 29 de mayo de 1946, cuya función principal fue la creación de empresas a través de créditos con lo cual se comenzó a estimular el nacimiento de la clase media. El 14 de noviembre de 1947 se instaló el II Congreso Sindical Nacional, que estaba apoyado por el gobierno revolucionario y donde se organizó la Confederación de

Trabajadores de Venezuela (CTV), organismo que agrupaba la mayor parte de los sindicatos del país. Como consecuencia de ello nació la clase obrera organizada.

Esta situación de apoyo a la movilidad social se paralizó en 1948, los militares derrocaron al primer presidente civil electo por el voto popular, Rómulo Gallegos. Durante casi una década nuestro país vivió otra dictadura, presidida sucesivamente por Carlos Delgado Chalbaud, Germán Suárez Flamerich y Marcos Pérez Jiménez, en la cual no se promovió el progreso de los ciudadanos, sino que su acción se redujo a la construcción de obras de infraestructura de gran tamaño, que aún hoy en día confunden el pensamiento. Hoy, algunos expresan equivocadamente que en esa época se creó la mayor parte de la infraestructura del país y más todavía, llegan a expresar que se planificó casi todo lo que existe en la actualidad. Nada más lejos de la verdad, en primer lugar, el desarrollo de un país no puede ser medido solamente por la cantidad de concreto armado que gestione y, en segundo lugar, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez que se esforzó en construir muchas obras en Caracas y sus alrededores, pero olvidó que existe un país más allá, en el interior, el cual se encontraba en el más grande abandono. La llegada de la democracia en 1958 impulsó desde el principio, no sólo una gran cantidad de obras de infraestructura, esta vez en todo el país, sino que reivindicó a la sociedad venezolana a través de nuevos estímulos.

Además de la CVF y la CTV, se crearon nuevos organismos que permitieron a las clases menos favorecidas permear en forma ascendente y mejorar su nivel de vida. El 22 de agosto de 1959 fue creado el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), teniendo como objetivo principal la formación laboral del personal administrativo y obrero no escolarizado. Con ello adquirirían un conocimiento que les permitía ganarse la vida con un mejor ingreso. Otro aspecto que fue

fundamental en progreso social fue la expansión de la educación universitaria. Descuidada como fue durante los gobiernos militaristas, hasta 1957 sólo existían seis universidades en Venezuela y cuatro de ellas estaban en Caracas. La democracia creó ciento cuarenta y cinco instituciones universitarias en todo el territorio nacional. Adicionalmente, el 1º de junio de 1975 se decretó la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho para financiar estudiantes universitarios en el exterior. Las posibilidades de estudios superiores trajeron como consecuencia que muchos venezolanos pudieran profesionalizarse y ascender en la escala social.

Con todas estas políticas se potenció tanto a la clase media como a la clase obrera en una sociedad con mayor capacidad de percolación. Sin embargo, desde 1999 todas estas iniciativas naufragaron con un régimen que generó una política de polarización y enfrentamiento social. Más grave aún lo constituye la reducción del poder adquisitivo del salario, ya que entre 1999 y 2013 se perdió poco más del 20% del poder de compra de los trabajadores asalariados, el peor desempeño entre los países de Latinoamérica. Esto no es producto de equivocaciones, sino una política deliberada para empobrecer a los venezolanos, habida cuenta que la base política de apoyo al régimen actual está en las clases populares, éste no permitirá la movilidad social porque significaría el fin de su permanencia en el poder. Sin duda alguna, sólo en democracia los ciudadanos pueden progresar en todos los sentidos.

Descentralización

La democracia es definida generalmente como el “gobierno del pueblo”. Ahora bien, el poder tiene mayor legitimidad a medida que su origen y sus decisiones se acercan más a los ciudadanos. La Guerra Federal

de 1859-1863 fue el conflicto que más pérdidas humanas y materiales crearon a nuestro país después de la Independencia. Los vencedores de la contienda sostenían que el sistema federal, es decir, el que permite que los estados y municipios tengan autonomía para tomar decisiones sobre los asuntos que corresponden a sus entidades, era el mejor para gobernar. Sin embargo, a pesar que el escudo nacional posee un homenaje a la Federación, esto sólo constituyó una mera formalidad que no se hizo realidad por muchos años.

Todas las decisiones estaban centralizadas y los designios de los funcionarios de Caracas prevalecían sobre la actuación los representantes de los gobiernos estatales y municipales. Esta situación generó que muchos recursos fueran destinados a la capital y zonas circunvecinas por los gobernantes militares y sus testaferros civiles. Al llegar la democracia civil encontró un país donde la capital era un hermoso lugar que servía de vitrina para demostrar las bondades de la dictadura perezjimenista, pero el resto del país estaba abandonado.

La actuación de los gobernantes civiles y democráticos fue apuntar a la dotación de las entidades federales de mayor poder para auto-gobernarse, pero eso llevaría algún tiempo porque había que construir primero los cimientos de la democracia. Se comenzó entonces por crear instituciones de planificación regionales que se encargarían de elaborar y ejecutar proyectos de desarrollo. En ese sentido, se creó en 1960 la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que administra además las empresas básicas de Estado; en 1964 el Consejo Zuliano de Planificación y Promoción (Conzuplan), la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (Fudeco) y Corporación de Los Andes (Corpoandes); en 1969 la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia); en 1970 la Corporación de Desarrollo de la Región Norienta (Corporiente); en

1972 la Corporación de Desarrollo de la Región Centro-Occidental (Corpoccidente); en 1981 la Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos (Corpollanos) y la Corporación de Desarrollo de la Región Central (Corpocentro); en 1982 la Oficina Regional de Planificación y Coordinación (Orcoplan) y en 1988 la Corporación Venezolana del Suroeste (CVS). A esto se unió la promulgación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1978, que permitió darle carácter legal a las asociaciones de vecinos y la separación de las elecciones municipales de las nacionales. Hubo sólo dos elecciones de este tipo en 1979 y 1984 donde se escogieron los concejos municipales.

En 1984 inició sus funciones la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copro) que elaboró valiosas propuestas como la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores en 1988, hasta ese momento nombrados por el presidente de la república; la reforma a la Ley Orgánica de Régimen Municipal en 1988 que creó la figura del alcalde y estableció su elección por voto popular, igual que los gobernadores y la Ley Orgánica de Descentralización Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público promulgada en 1989, ella especificaba las funciones que serían trasladadas a los estados y municipios y aumentaba el situado constitucional de 15% a 20% del total de ingresos ordinarios del presupuesto. Esto permitió la realización de las primeras elecciones regionales y municipales el 3 de diciembre de 1989 y hubo otras en 1992, 1995 y 1998. En 1993 se aprobó la creación del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides), cuya función era trasladar parte del monto recaudado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a través de proyectos a los estados y municipios para su desarrollo.

Esta historia cambió a partir de la llegada al poder de presidente Hugo Chávez, cuando revivieron los fantasmas del militarismo cen-

tralista, expresada en la Constitución de 1999, en ella se arrebataron competencias a los estados y municipios, se eliminaron las juntas parroquiales e incluso se negaron recursos o se crearon gobiernos paralelos en entidades cuyos titulares no eran afectos al proceso. Esta situación de arbitrariedad aumentó con la amenaza de establecer un Estado Comunal sin asidero constitucional y rechazado por el pueblo en el referendo de 2007. De nosotros depende que esta iniciativa negativa no prospere y se mantenga la libertad, incluso para aquellos que inconscientemente conspiran contra ella.

Educación

La evolución de la educación en Venezuela tiene varias etapas. Para 1936 el analfabetismo alcanzaba cerca del 70% de la población, para 1957 había disminuido a un 40% y los niños en edad de escuela primaria que asistían a clases eran alrededor del 66%. El balance al final del período posgomecista era positivo, pero aun habían muchas cosas por hacer: casi la mitad de la población continuaba sin poder leer ni escribir y uno de cada tres niños venezolanos aun no tenía acceso a las aulas de enseñanza.

La democracia actuó en varios frentes para revolver las deficiencias educativas. Los problemas a atacar en este campo eran: escasez de docentes, presupuesto insuficiente, pocos planteles, difícil acceso vial a los centros educativos y a esto se añade que en 1957 la educación media era exclusiva para las capitales estatales, esta situación agravaba enormemente el acceso a la educación.

Esta posibilidad no abarcaba todas las entidades regionales, pues el liceo Santiago Aguerreverre de Puerto Ayacucho, capital del actual

estado Amazonas, llegaba sólo al tercer año, los que deseaban seguir estudios debían ir a otro estado, siendo el más cercano el liceo Francisco Lazo Martí de San Fernando de Apure, el único en todo el estado que graduaba bachilleres. Para llegar allí, los estudiantes debían navegar el río Orinoco en chalana y luego recorrer otros 220 km por carreteras de tierra hasta San Fernando. La mayoría de los venezolanos pasaban por muchos sacrificios sólo para estudiar el bachillerato.

El gobierno del presidente Rómulo Betancourt comenzó la construcción de numerosos planteles en todo el país, haciendo énfasis en las zonas hasta más desposeídas. En 1959 abrió su puertas el Pedagógico de Barquisimeto y además se creó la carrera de educación en varias universidades nacionales. También en esta época se inició el proceso destinado a establecer la educación básica, cuyo fin era aumentar hasta el noveno grado (tercer año) la obligatoriedad de estudio. Cada año el gobierno nacional iba incrementando el presupuesto para la educación pues, aunque parezca irreal, los gobiernos militaristas destinaban más fondos públicos al Ministerio de Defensa que al de Educación.

Esta situación se fue corrigiendo hasta que en el siguiente período constitucional, correspondiente al presidente Raúl Leoni, el presupuesto del Ministerio de Educación superó al de la Defensa. En 1971, primera gestión del presidente Rafael Caldera, se crearon los pedagógicos de Maracay y Maturín. En 1975, durante el primer mandato del presidente Carlos Andrés Pérez, se empezó con la ejecución del programa ACUDE para combatir los restos de analfabetismo y en 1978 se llegó al 100% de escolarización de los niños en edad de primaria. En 1980, cuando el jefe de estado era Luis Herrera Campíns, se inició la Escuela Básica y en 1983 se creó la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) que unificó todos los pedagógicos públicos.

Hay que agregar que los gobiernos democráticos lograron también las siguientes metas: triplicar la cantidad de carreteras existentes a las de 1957; aumento de la matrícula escolar a 6.184.835 estudiantes; el analfabetismo disminuyó de 40% en 1958 a 7% en 1998; se logró que cada municipio y casi todas las parroquias tuvieran al menos un liceo público; la tasa de escolaridad por habitantes entre 3 y 24 años incrementó de 24,5% en 1957 a 64,15% en 1998. La democracia venezolana fue sin duda alguna el mejor período para la educación en nuestro país.

Educación Universitaria

La posibilidad masiva de estudiar en universidades es reciente. Había una enorme escasez de profesores antes del período democrático, en vista de formar recursos humanos suficientes para la cantidad de aspirantes a ingresar en el nivel de educación superior. Las dificultades se incrementaban por las pocas instituciones universitarias existentes en 1957, sólo seis: Universidad Central de Venezuela, fundada en 1721; Universidad de Los Andes de 1810; el Pedagógico Nacional, actual UPEL-Pedagógico de Caracas de 1936; La Universidad del Zulia creada 1946; y dos universidades privadas, la Santa María y Católica Andrés Bello, ambas en 1953 durante la dictadura de Pérez Jiménez.

Esta aclaratoria se hace indispensable pues se ha querido hacer creer que la obra universitaria de Marcos Pérez Jiménez es la más importante y que además “hizo” la Ciudad Universitaria de Caracas, actual sede de la UCV. Lo cierto es que, la Ciudad Universitaria, obra insigne del gran Carlos Raúl Villanueva, fue decretada por el gobierno de Medina Angarita en 1943, su construcción se inició al año siguiente y se culminó en los primeros gobiernos de la democracia venezolana. Es injusto

entonces darle todos los créditos a Pérez Jiménez, que detentó el poder entre 1952 y 1958, respecto a esta obra que fue planificada antes de su mandato y cuya construcción involucró a todos los gobiernos desde Medina hasta la democracia, incluyendo a la dictadura perezjimenista.

Esta malsana interpretación histórica parte del hecho que en 1954 la sede de la UCV, que estaba en el Palacio de las Academias, se mudó a la Ciudad Universitaria. Como sucedió muchas veces durante ese gobierno militar, le correspondió “cortar la cinta” al dictador llevándose una gloria inmerecida. Hay que puntualizar el hecho que en 1957 sólo había 10.270 estudiantes universitarios en esas instituciones.

La democracia actuó rápida y eficazmente para resolver ese grave problema. En el propio año inicial de 1958 creó dos universidades: Carabobo y Oriente. Betancourt decretó el Pedagógico y el Politécnico de Barquisimeto y la Centro Occidental Lisandro Alvarado. Poco a poco ya todos los venezolanos tendrían las universidades cada vez más cerca de sus sitios de residencia. El presidente Raúl Leoni continuó aquellas gestiones con la creación de la Universidad Simón Bolívar. Ya en el primer gobierno de Rafael Caldera, se ponen en funcionamiento las universidades Simón Rodríguez, Táchira, Academia Militar de Venezuela, Escuela Naval de Venezuela, Escuela de Aviación de Venezuela y Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación, luego Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional, al mismo tiempo los pedagógicos de Maturín y Maracay y los politécnicos de Guayana y Luis Caballero Mejías y los primeros tecnológicos y colegios universitarios del país.

De este quinquenio es importante hacer mención de la aprobación de la Ley de Universidades de 1970 que hacía énfasis en la autonomía universitaria y de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), ente técnico de apoyo. El primer gobierno

de Carlos Andrés Pérez creó las universidades Ezequiel Zamora, Francisco de Miranda, Rómulo Gallegos y Nacional Abierta. De esta gestión hay que resaltar el comienzo del Plan de Becas Gran Mariscal de Ayacucho de 1974, cuya función era el financiamiento a estudiantes universitarios dentro y fuera del país.

Luis Herrera Campíns en su presidencia decretó las universidades de Guayana, Rafael María Baralt y la Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), esta última concentró a partir de entonces a todas las instituciones pedagógicas. Jaime Lusinchi creó una serie de tecnológicos y colegios universitarios y materializó el comienzo de la UPEL. En el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez pudo iniciar la Universidad Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo) que reunió a todos los politécnicos del país. Finalmente, Rafael Caldera en su segunda gestión creó la Universidad del Yaracuy.

En este recuento sólo se citaron las universidades públicas, pero si se agregan los tecnológicos, colegios universitarios y sus pares del sector privado llega a un incremento de ciento treinta nuevas instituciones universitarias en 1998, impresionante cifra para tan solo 40 años. Como consecuencia de esta política la cifra de estudiantes de educación superior creció a 796.350 en 1998.

Todas estas cifras tienen como fin derrotar los mitos de la dictadura, también los más actuales de la exclusión puntofijista y la propuesta de la “universidad popular”. Los usufructuarios del poder desde 1999 sólo han elevado en treintaúñ las instituciones universitarias, de las cuales cinco son públicas y veintiséis privadas, algo extraño para un régimen que se autodefine socialista. Además, ha herido gravemente la autonomía universitaria a través de acciones terroristas y el congelamiento presupuestario, reduciendo a niveles de mendicidad el ingreso de los profesores de ese sector.

Política Laboral

La política laboral en Venezuela durante el siglo xx comienza con el ascenso de Eleazar López Contreras a la presidencia del país, cuando en 1936, promulgó la Ley del Trabajo ese mismo año. Esta no fue la primera ley laboral, pues Gómez promulgó una en 1928 pero nunca llegó a aplicarse. La ley de 1936 estableció la jornada de 8 horas de trabajo, introdujo sanciones para asegurar el cumplimiento de las normas y sentó las bases de la futura seguridad social. A pesar de este avance las gravísimas condiciones laborales llevaron a los trabajadores petroleros a la célebre huelga de finales de ese mismo año.

El 9 de octubre de 1944, bajo el gobierno de Isaías Medina Angarita, se creó el Instituto Central de los Seguros Sociales transformado en el actual Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en 1946, cuando Rómulo Betancourt era presidente de la Junta Revolucionaria. En aquella época ese organismo sólo se ocupaba de la cobertura de riesgos de enfermedades, maternidad, accidentes y patologías.

El 14 de noviembre de 1947, en el marco del II Congreso Sindical Nacional, fue creada la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), estimulada por el gobierno revolucionario y destinada a fomentar la organización y defensa de los trabajadores venezolanos. Lamentablemente, el retorno de los gobiernos militaristas paralizó todo este avance. Hay un dato importante que demuestra el retroceso en el campo laboral, la tasa de desocupación en 1952, año en el que tomó el poder Marcos Pérez Jiménez, era del 6,4% y en 1957 había ascendido a 7,4%. Esto contrasta con la idea generalizada de la abundancia de trabajo durante se régimen.

La llegada de la democracia abrió el período de mayor progreso en nuestra patria y eso se reflejó en la política de trabajo. En 1967, siendo Raúl Leoni presidente, entró en vigencia la nueva Ley del Seguro Social y se aumentaron los beneficios; además de asistencia médica integral, se establecieron las prestaciones a largo plazo (pensiones) por conceptos de invalidez, incapacidad parcial, vejez y sobrevivientes, asignaciones por nupcias y funerarias. En 1974, cuando gobernaba por primera vez el presidente Carlos Andrés Pérez, se decreta el salario mínimo y se promulga la Ley contra Despidos Injustificados. En 1978, al final del quinquenio del citado gobernante, se llegó a una tasa de desocupación de 4,6%, la más baja de toda la historia nacional, es decir, pleno empleo. En 1986 el gobierno del presidente Jaime Lusinchi promulgó la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, para garantizar a los trabajadores un medio ambiente de trabajo adecuado.

En 1989 el presidente Carlos Andrés Pérez, en su segundo gobierno, creó el Seguro de Paro Forzoso, para amparar a los trabajadores despedidos injustificadamente y también la Ley de Política Habitacional que facilitaba créditos a los trabajadores para la adquisición de viviendas. En 1991 entró en vigencia la Ley Orgánica del Trabajo, que ampliaba los beneficios de la 1936, sustituida a su vez por la de 1997 que estableció las prestaciones sociales calculadas según el salario de cada año. Los responsables del poder desde 1999 no han creado nuevos beneficios para los trabajadores, quienes se han visto afectados en su salario, que ha disminuido su poder de compra real un 22% entre diciembre de 1998 y junio de 2013 debido a la inflación, la mayor de América Latina.

La Serie Verbum forma parte de la Colección Civitas, destinada al público en general. Su objetivo es dar a conocer de manera periódica a los personajes y las instituciones insignes de Venezuela, a través de la reproducción de documentos fundamentales abocados a la ciudadanía en diferentes aspectos, todos acompañados de textos sucintos sobre la pertinencia de éstos.

